

**RECOMENCIÓN NÚMERO: 17/2008.
QUEJOSO: MIGUEL JUAN PEREZ VAZQUEZ,
A FAVOR DE MARIA JUANA PETRONA.
EXPEDIENTE: 12041/2007-I.**

**C. MIGUEL CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AHUACATLÁN, PUEBLA.
PRESENTE.**

Respetable Señor Presidente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 12041/2007-I, relativo a la queja que formuló Miguel Juan Pérez Vázquez, a favor de María Juana Petrona, y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 29 de noviembre de 2007, este Organismo Público, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de María Juana Petrona, quien a través de escrito de fecha 26 de noviembre de 2007, dirigido al Titular de esta Institución y presentado a su favor por Miguel Juan Pérez Vázquez, expresó: *“...Me dirijo ante usted con la finalidad de exponer mi presente acusación y queja ante esta honorable dependencia, soy Originario de la comunidad de Pochalcatl Municipio de Ahuacatlán Puebla de extracción indígena lengua materna náhuatl soy propietaria de un terreno denominado “CALTENCO TIPITLAYO ZACAMILIA” inscrito ante el registro público de la propiedad del*

distrito de Zacatlan Puebla, bajo la partida Numero 795 a fojas 169 del libro uno tomo 39 de fecha cinco de Agosto de 1992 que se encuentra ubicado en el barrio de Pochalcatl, acudo ante usted para hacer de su conocimiento resulta ser que desde día Diecisiete de Octubre de dos mil siete sin mi consentimiento sin ningún escrito que yo firmara, el H. Ayuntamiento de Ahuacatlán Puebla en especial la dirección de obras a cargo del señor Gaspar Reyes García, personal a su cargo se encuentran trabajando en mi propiedad, para la construcción de un deposito de agua por lo que al ver tanto destrozo en mi terreno interpose una denuncia ante el ministerio Público de Zacatlan, Puebla el día Ocho de Noviembre del presente año con numero de averiguación 661/2007 anexo copia de la presente denuncia, como no se el Español nombre como interprete al señor miguel Juan Pérez Vázquez originario del barrio de Analco Ahuacatlán puebla para que me represente en la tramitación de la denuncia, pero al ver que los citatorios que ha mandado el agente del Ministerio publico del distrito Judicial de Zacatlan Puebla y no se presenta el director de obras Gaspar Reyes García del Municipio de Ahuacatlán Puebla para llegar un acuerdo o en su caso una indemnización por los daños y perjuicios queme están causando y paren la obra, por lo que acudo ante usted, que interceda, para que los daños causados, en mi propiedad, sea indemnizado y no sigan cometiendo tanto atropello al H ayuntamiento Municipal de Ahuacatlán, Puebla actualmente como presidenta interina la señora Adela García Reyes...” (foja 6).

2.- El 4 de diciembre de 2007, compareció ante personal de este Organismo Público, el C. Miguel Juan Pérez Vázquez, quien exhibió a favor de la quejosa y como elemento de prueba, el original del instrumento Notarial que ampara la propiedad de la aquí agraviada, respecto al inmueble denominado “Caltenco Tipitlayo Zacamilia” ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Ahuacatlán, Puebla, del cual se agregó copia certificada al expediente; asimismo, realizó algunas manifestaciones a favor de María Juana Petrona.

3.- Los días 11 y 13 de diciembre de 2007, una Visitadora de esta Institución, realizó diligencias con la finalidad de recabar informe preliminar sobre los hechos, cuyo resultado será descrito posteriormente.

4.- El 11 de diciembre de 2007, María Juana Petrona, asistida del traductor Miguel Juan Pérez Vázquez, ratificó su escrito de queja de fecha 26 de noviembre de 2007; asimismo, amplió dicha queja, en los términos que serán detallados en el capítulo de evidencias.

5.- Por determinación de 16 de enero de 2008, esta Comisión de Derechos Humanos admitió la queja en comento, a la que asignó el número de expediente 12041/2007-I, y en consecuencia, solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, sin que lo haya rendido.

6.- Durante la investigación de los hechos se solicitó atenta colaboración a la Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que remitiera copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 661/2007, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, colaboración que fue cumplimentada en sus términos.

7.- Por resolución de 24 de marzo de 2008, el Segundo Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión.

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes:

EVIDENCIAS

I.- Queja presentada ante este Organismo por María Juana Petrona, a través de su escrito de 26 de noviembre de 2007, el cual fue debidamente ratificado y cuyos términos se aprecian en el punto de hechos número uno, del capítulo que antecede, mismos que se dan por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias (foja 6).

II.- Manifestaciones realizadas ante esta Institución el 4 de diciembre de 2007, por el C. Miguel Juan Pérez Vázquez, traductor de la María Juana Petrona, y quien a su favor dijo: *“...Que solicita que por conducto de este Organismo se dicten las medidas cautelares pertinentes ya que están construyendo en el terreno una caja de agua potable; sin embargo dicha construcción se está efectuando sin autorización de la dueña del predio lo que puede generar un menoscabo en su patrimonio al afectársele; por lo que debe pararse dicha obra; de igual manera se ha intimidado a los familiares de la dueña, ya que los Policías de Ahuacatlan con metralleta resguardaron el lugar cuando se les solicito que pararan la obra; motivo por el cual pide se de continuidad a la presente queja, por las consecuencias que puedan tener los actos de la autoridad...”* (foja 19).

III.- Ampliación de la queja realizada por María Juana Petrona, quien el 11 de diciembre de 2007, expresó ante esta Institución y por conducto del traductor Miguel Juan Pérez Vázquez lo siguiente: *“...precisando que la presente queja la hace valer en contra del Presidente Municipal de Ahuacatlán, Pue, por la afectación, daño en propiedad ajena y despojo de que soy objeto, perjuicios que efectúa la autoridad en mi propiedad denominada “Caltenco Tipitlayo Zacamilia”, cuya propiedad acredité con la escritura correspondiente, misma que ya fue exhibida y cuya obra por la autoridad consiste en un depósito de agua, el cual me afecta en una superficie aproximada de seis metros cuadrados y cuya obra están a punto de terminar; de igual manera con esta obra derribaron cerca de diez árboles de ailita y seis árboles de encino; también tomaron piedras para la construcción del depósito de agua, piedras que se encuentran en mi propiedad, considerando que tomaron dos camionadas de dicha piedra de mi propiedad, por lo anterior formulo la presente queja, estando en la mejor disposición en caso de que la autoridad quiera pagar los daños, de negociar el pago de los mismos, por lo que, exhibo siete placas fotográficas y un croquis en el que se especifica y observa los daños causados, solicitando se agreguen dichos documentos a la presente certificación...”* (fojas 35 y 36).

IV.- Copia certificada del instrumento notarial número diecisiete mil cuatrocientos setenta y uno, de fecha 30 de junio de 1992, realizado ante la fe del Notario Público Número Uno, del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, relativo a la Protocolización de una escritura privada de compraventa, respecto al predio rústico denominado “Caltenco Tipitlayo Zacamilia”, ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Municipio de Ahuacatlan, Puebla, y con el cual se demuestra que María Juana Petrona, es propietaria del inmueble referido, con las siguientes medidas y colindancias: NORTE: mide 99.50 metros y linda con predio de María Salvadora; SUR: mide 165.00 metros y linda con predio de María Francisca, María Leonila y Miguel Ventura; ORIENTE: mide 60.50 metros y linda con predio de Bernardo Gil y PONIENTE: mide 103.00 metros y linda con predio de María Juana Natividad Pila y río que atraviesa dicho predio (foja 22 - 32).

V.- Informe preliminar que sobre los hechos rindió la C. Adela Reyes García, Presidenta Municipal de Ahuacatlán, Puebla, el día 11 de diciembre de 2007, quien con relación a los hechos expresó: *“... Que ayer estuvo el Delegado de Gobernación, respecto de este mismo asunto, a quien se le llevo a verificar que el terreno de referencia es de otra persona, que no tuvo conocimiento del resultado, asimismo se que la hoy quejosa esta pidiendo una indemnización de 10 millones de pesos, lo que es exagerado; posteriormente, se detuvieron a varias personas que pretendía tumbar el pozo con picos y palas, por el daño causado en propiedad ajena, sin embargo, el informe se rendirá oportunamente ante esa Comisión...”* (foja 33).

VI.- 7 fotografías que fueron exhibidas por la quejosa María Juana Petrona, mediante diligencia de 11 de diciembre de 2007, las cuales se aprecian de las fojas 39 a la 41, del expediente en que se actúa.

VII.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de la averiguación previa 661/2007/ZAC, iniciada con la querella presentada por María Juana Petrona, que se tramita en la Agencia del Ministerio Público Investigador y Adscrita a Zacatlán,

Puebla, de la que por su importancia destaca la siguiente:

Comparecencia de **Gaspar Reyes García**, de 30 de noviembre de 2007 (señalado como autoridad responsable por la quejosa), quien en relación a los hechos dijo: *“Que comparezco ante esta Representación Social, toda vez que fui citado y enterado del motivo de mi citatorio, manifiesto que efectivamente se realizó una caja de captación para un sistema de Agua Potable para la localidad de Pochalcatl, mismo que ser realizo en el terreno de la señora PASCUALA SISIACA, y posiblemente las personas que yo mande a construir esa caja hayan afectado la captación de la señora MARIA JUANA PETRONA, porque posteriormente de que cuando se estaba realizando esta caja la señora MARIA JUANA PETRONA, me fue a vera mi Oficina en la Presidencia Municipal de Ahuacatlan, Puebla, ya que yo soy el Subdirector de Obras Públicas, cargo que posteriormente acreditaré, y me fue a decir que yo había afectado su terreno por la obra que estaban haciendo, y yo le dije que la caja no se iba hacer en su terreno y luego me dijo bueno hagan la caja pero yo no les voy a dar permiso de tomar el agua, y yo le dije que el agua no es negociable que es un recurso federal, porque en el lindero de su terreno se encuentra un manantial, pero yo le dije que si le hicieron daños a su manguera, a su toma, yo le iba a reparar los daños y ella me dijo que no quería eso que ella quería DIEZ MILLONES DE PESOS, y yo estuve con ella hablando tratando de convencerla para que entendiera que la obra es para un beneficio que ellos mismos en su Comunidad pero ella no entiende porque no accede a nada solamente me pide los diez millones y el Ayuntamiento me autoriza a reparar los daños que presente su predio pero no lo que ella me pide y por eso no llegamos a ningún acuerdo, pero en cuanto se valúen los daños por un perito yo estoy dispuesto a cubrir los daños, pero yo en ningún momento mande a destruirle algo de su propiedad, y en cuanto a lo que dice que mis trabajadores yo se que no le hicieron nada...”* (fojas 83 - 85).

OBSERVACIONES

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad.

De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema.

Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se enuncian:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece:

Artículo 14 párrafo segundo: *“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho”.*

Artículo 16 primer párrafo: *“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”.*

Artículo 27 párrafo segundo: *“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.*

Artículo 102 Apartado B.- *“El Congreso de la Unión y las*

legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales...”

Artículo 115 fracción V inciso a) y d): *“Los Municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas estarán facultadas para: a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo”.*

Artículo 128.- *“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.*

Los dispositivos legales de carácter Internacional que en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, determina:

Artículo 17.1. *“Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente”.*

Artículo 17.2 *“Nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad”.*

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone:

Artículo 21.1. *“Toda persona tiene derecho al uso y goce*

de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.

Artículo 21.2. “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o interés social, en los casos y según las formas establecidas por la Ley”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo conducente estipula:

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del organismo de protección, respecto y defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.

Artículo 16.- “La Ley protegerá el derecho de propiedad para que sus titulares obtengan los beneficios que son susceptibles de proporcionar los bienes”.

Artículo 125 fracciones I y IV.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I. Los Servidores Públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los Servidores Públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, preceptúa:

Artículo 2º: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: *“Se entiende por Derechos Humanos los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.*

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: ...XXII.- Declarar conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y decretar su expropiación”.

Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público...”.

Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”.

La Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, sobre el particular establece:

Artículo 3°.- “En los casos comprendidos en el artículo anterior previa declaración del Ejecutivo del Estado, del Ayuntamiento del Municipio, o Consejo Municipal dentro de cuya jurisdicción se encuentre comprendido el caso de utilidad pública, procederá la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines que se establezcan en la propia declaratoria”.

Artículo 6.- “El decreto de expropiación se mandará publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación y se notificará al propietario de bien expropiado; personalmente, o por medio de instructivo cuando se tuviere conocimiento de su domicilio. El instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa, o en defecto de éstos, a alguno de los vecinos inmediatos o al inspector de la sección, cerciorándose previamente la persona comisionada para hacer la notificación de que en ese lugar reside efectivamente el interesado, y se asentará la razón correspondiente. El instructivo contendrá copia integra del decreto expropiatorio, y la fecha y hora en que se deja, así como el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. Si el propietario del bien expropiado no es vecino del Estado o Municipio en los casos a que se refiere este artículo se le notificará por medio del oficio remitido por correo certificado con acuse de recibo. En caso de que ignorase el domicilio de la persona o personas interesadas, se les notificará el decreto expropiatorio por edictos publicados tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación a juicio de la autoridad expropiatoria y bajo su responsabilidad”.

Artículo 8.- “Una vez publicado el decreto de expropiación y notificado el propietario, se mandará inscribir en el

Registro Público de la Propiedad que corresponde si se trata de inmuebles, y la autoridad que haya ordenado la expropiación, podrá proceder a la ocupación de los bienes muebles o inmuebles, objeto de la misma o imponer la ejecución inmediata de las disposiciones limitativas al dominio”.

Artículo 10.- “Iniciado el término a que se refiere el artículo anterior, la autoridad que decretó la expropiación procederá a fijar el monto de la indemnización de acuerdo con las siguientes bases: El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las Oficinas Fiscales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que podrá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyos valor no esté fijado en las Oficinas Fiscales”.

Artículo 14.- “La autoridad expropiante fijará la forma y los plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcarán nunca un periodo mayor de diez años”.

El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla estipula:

Artículo 984.- “La propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes”.

Artículo 1367.- “Es poseedor de Buena fe: I.- El que entra en posesión en virtud de un justo título...”

Artículo 1369.- “Se llama justo título: I.- El que es bastante para transferir el dominio, o en su caso, el derecho correspondiente.”

Del Código de Defensa Social del Estado se observan los siguientes preceptos legales:

Artículo 408.- *“Se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cincuenta días de salario: I.- Al que, de propia autoridad, y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”.*

Artículo 409.- *“Cuando el despojo se cometa materialmente por cinco o más personas, la sanción de prisión será de dos a siete años y la multa de quince a ciento cincuenta días de salario y se aplicará a los invasores, a quienes dirijan la invasión y a su autor o autores intelectuales si los hubiere”.*

Artículo 419.- *“Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: ...IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”.*

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado consigna en su artículo 50: *“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ”.*

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos fundamentales de la quejosa.

En efecto, María Juana Petrona, esencialmente reclama el despojo y daño en propiedad ajena cometidos en su agravio, con motivo de una obra a cargo del C. Gaspar Reyes García, que de acuerdo a las evidencias obtenidas, fungía como Subdirector de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, en el momento en que ocurrieron los hechos, actos que se realizaron en el predio denominado “Caltenco Tipitlayo Zacamilia”, ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Municipio de Ahuacatlán, Puebla, y que según su dicho se suscitaron en los términos que expresó al presentar queja ante esta Institución (evidencia I) y ampliación respectiva (evidencia III), los que se dan por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias.

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente se desprende, que mediante oficios V1-32/2008, de 16 de enero de 2008 y V1-1-087/2008, de 4 de marzo de 2008, se solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, respecto a los hechos expuestos por María Juana Petrona, sin embargo, dicho servidor público se abstuvo de rendirlo.

En ese contexto, resulta evidente que el Edil mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige este Organismo y que a la letra dice: *“Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que este conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”*.

Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en el caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35 de la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice: *“El informe que rindan las autoridades señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos*

de información que consideren pertinentes. La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”.

La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos materia de la queja, tomando en consideración la omisión del Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, de rendir el informe requerido por este Organismo Público.

Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el expediente se desprenden las siguientes evidencias:

a) Copia certificada del instrumento notarial número diecisiete mil cuatrocientos setenta y uno, de 30 de junio de 1992, realizado ante la fe del Notario Público Número Uno, del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, relativo a la Protocolización de una escritura privada de compraventa, respecto al predio rústico denominado “Caltenco Tipitlayo Zacamilia”, ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Municipio de Ahuacatlán, Puebla, y con el cual se demuestra que María Juana Petrona, es propietaria del inmueble referido, documento que tiene valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al tratarse de un documento público que no fue redargüido de falso por la autoridad señalada como responsable (evidencia IV).

b) Manifestaciones realizadas ante esta Institución el 4 de diciembre de 2007, por el C. Miguel Juan Pérez Vázquez, quien expresó, entre otros hechos, que en el predio de la quejosa se estaba construyendo una caja de agua potable sin autorización de la dueña, lo que podría generar un menoscabo en su patrimonio, e incluso afirmó que los familiares de la aquí agraviada eran intimidados por la Policía Municipal del Ahuacatlán, Puebla, quienes con metralleta resguardaban el lugar a partir de que se les pidió que pararan la obra (evidencia II).

c) 7 fotografías exhibidas, en las cuales se aprecia follaje, un río, unas plantas derrumbadas, diversas personas trabajando sobre un predio, la cuales tienen valor probatorio, al ser adminiculadas con los demás elementos de convicción (evidencia VI).

d) Comparecencia de **Gaspar Reyes García**, de 30 de noviembre de 2007, ante el Agente del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, dentro de la averiguación previa 661/2007/ZAC, quien entre otras cosas dijo, que efectivamente se realizó una caja de captación para un sistema de Agua Potable para la localidad de Pochalcatl, en el terreno de Pascuala Sisiaca y posiblemente las personas que mandó a construir esa caja hayan afectado la captación de la señora María Juana Petrona, porque durante el tiempo que se estaba realizando esa caja, la quejosa lo fue a ver a su oficina ya que es el **Subdirector de Obras Públicas** para decirle que había afectado su terreno por la obra que estaban haciendo (evidencia VII inciso a).

Las evidencias señaladas tienen valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su Reglamento Interno y prueban los hechos expuestos por María Juana Petrona, en el sentido de que el inmueble de su propiedad denominado “Caltenco Tipitlayo Zacamilia”, ubicado en el Barrio de Pochalcatl, Municipio de Ahuacatlan, Puebla, fue afectado en una superficie de aproximadamente 6 metros cuadrados para la construcción de una caja de agua; que fueron dañados 16 árboles para la realización de esos trabajos y utilizadas aproximadamente dos camionadas de piedra que ahí se encontraba para la construcción aludida.

Ahora bien, como se dijo anteriormente, la Presidenta Municipal de Ahuacatlán, Puebla, al no objetar los hechos materia de la queja, aceptó tácitamente los mismos, lo que implica también, que los trabajos en cuestión fueron ordenados por el Ayuntamiento de ese Municipio, y encomendados para que se llevaran a cabo bajo la dirección del C. Gaspar Reyes García, Subdirector de Obras Públicas y probablemente de otros servidores públicos de ese Ayuntamiento.

Esto es así, tomando en consideración que los artículos 2 y 91 fracciones I y II de la Ley Orgánica Municipal, establecen que el Municipio es una Entidad de derecho público base de la división territorial y de la Organización Política y Administrativa del Estado de Puebla, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; asimismo, su Ayuntamiento estará presidido por un Presidente Municipal el cual tiene entre otras obligaciones el de difundir, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan.

Igualmente, en términos del artículo 115 fracción III inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 104 de la Constitución Local de Puebla, los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el del suministro de agua potable.

En ese contexto, es incuestionable que para proporcionar un servicio público como es el de agua potable, se debe contar con la infraestructura necesaria para su extracción, conducción y en su caso para el almacenamiento, infraestructura que también la conforman las cajas de agua potable, por lo que se puede concluir que la construcción de la caja de agua que menciona la quejosa, necesariamente estuvo a cargo del Municipio de Ahuacatlán, Puebla; tal circunstancia que además se corrobora por el propio Gaspar Reyes García, que en el tiempo que ocurrieron los hechos era el Subdirector de Obras del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla (evidencia VII inciso a). En esas condiciones, resulta lógico, que los integrantes del Ayuntamiento del Municipio referido, necesariamente autorizaron y ordenaron la instalación de la caja de agua controvertida y por ende la afectación del predio de María Juana Petrona, girando las instrucciones necesarias para esos efectos al Subdirector de Obras Públicas, como ejecutor de su determinación.

En ese contexto, para esta Institución resulta evidente que los responsables de la afectación del inmueble de María Juana

Petrona, fueron los integrantes del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, es decir, el Presidente Municipal y Regidores; asimismo, tuvo participación en la ejecución de los actos reclamados el C. Gaspar Reyes García, SubDirector de Obras Públicas, quien a pesar de que ante el Ministerio Público dijo que envió a trabajadores, que probablemente causaron daños que él no ordenó, tal circunstancia no lo exime de responsabilidad, ya que el era el responsable de la ejecución de los trabajos mencionados, por lo que también es corresponsable de los daños causados a la quejosa.

Ahora bien, las constancias que existen en el expediente, demuestran que la afectación del predio de María Juana Petrona, fue ilegal y arbitraria, en virtud de que no se obtuvo su autorización, ni consentimiento para disponer de una fracción de su inmueble para instalar una caja de agua, afectar sus árboles o tomar piedra de su inmueble para la construcción referida; tampoco se efectuó procedimiento expropiatorio que demostrara la legal actuación de la autoridad municipal, en virtud de que la expropiación es un acto de la administración pública para adquirir bienes de particulares por causas de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización, el cual se encuentra previsto por la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla.

Sin embargo, en el caso concreto, ninguno de los supuestos se dio, afirmación que tiene sustento en la omisión del C. Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, de exhibir documentos que justificaran la existencia de procedimiento expropiatorio o en su caso la anuencia de Maria Juana Petrona, para la afectación de su predio.

La afectación y los daños causados en el predio de María Juana Petrona, infringen los dispuesto por el artículo 14 de la Constitución General de la República, que en lo conducente establece, que nadie podrá ser privado sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el diverso 16 del Ordenamiento Legal invocado, el cual dispone que nadie puede ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable omitió realizar un procedimiento administrativo, con audiencia de la agraviada, en el que se observara su derecho a defender su patrimonio; y en su oportunidad se dictara una resolución de afectación en la que se señalaran las causas y necesidades de la obra, y el marco jurídico que fundamentara los actos.

Es importante señalar, que la realización de obras o colocación de infraestructuras para proporcionar agua potable es una facultad de la administración pública, en este caso municipal, para lo cual se requiere de una planeación, de considerar los medios al alcance, los probables daños que se causaran a los habitantes de las comunidades con las mejoras que se pretendan realizar, así como de los presupuestos legales que se deben reunir, para evitar responsabilidades de carácter penal y administrativo, por lo que los servidores públicos municipales no deben actuar bajo decisiones espontáneas, ejercer indebidamente el poder y utilizar la infraestructura del Ayuntamiento para realizar actos ilegales.

En ese contexto, cuando existe la necesidad de colocar infraestructura para proporcionar o coleccionar agua potable, corresponde al Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, y al Ayuntamiento que preside, atender en forma adecuada el asunto, realizar las gestiones conducentes para la facilitar legalmente la instalación de dicha infraestructura y de esa forma evitar daños como los ocasionados a la quejosa, quien sin motivo legal se vio prácticamente despojada de una fracción de su inmueble con una superficie aproximada de 6 metros cuadrados, se dañaron sus árboles y se utilizó piedra de sus inmueble, privándola de esa forma del derecho de usar y disfrutar de esos bienes de su propiedad.

Invariablemente la autoridad debe basar su función en el principio de legalidad y de esa forma respetar y tutelar de manera igualitaria los intereses de todos y cada uno de miembros de la población, por ello cuando en el interés público surge la necesidad de una obra pública en la que sea necesario afectar la propiedad

privada, la propia Ley le confiere facultades para que las haga valer, bajo la observancia de las normas y procedimientos existentes en el orden jurídico mexicano para preservar en todo momento el estado de derecho que mantenga el orden y la paz social.

Es cuestionable además, que para llevar a cabo los trabajos de instalación de la caja de agua, haya sido necesario utilizar la fuerza pública, circunstancia que se demuestra no sólo con las manifestaciones del C. Miguel Juan Pérez Vázquez (evidencia II), sino con el informe preliminar rendido por la C. Adela Reyes García, quien se ostentó como Presidenta Municipal de Ahuacatlán, Puebla, y dijo que fueron detenidas varias personas que pretendían tumbar el pozo con picos y palas, por el daño causado en propiedad ajena, sin que fuera probado este último hecho (evidencia V).

En ese contexto, se puede afirmar que la autoridad municipal actuó de forma arbitraria, ya que no solo se afectó el inmueble de la quejosa, sino también sus árboles, o que constituye un abuso de autoridad.

Por los motivos enunciados, se estima que la conducta del Presidente Municipal, integrantes del Ayuntamiento y Subdirector de Obras Públicas, todos del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, debe ser investigada, ya que se presume fundadamente que su conducta puede encuadrar en las hipótesis previstas por el artículo 419 del Código de Defensa Social del Estado, que establece: *“Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes:... IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público...”*; así como en lo previsto por los artículos 408, 409 y 414 del citado Ordenamiento legal, por el abuso de autoridad, despojo, daño en propiedad ajena y los que resulten, cometidos en agravio de María Juana Petrona.

Asimismo, se considera que la conducta de los servidores públicos mencionados, infringe lo establecido en los

artículos 17.1 y 17.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que su conducta debe ser investigada y sancionada como legalmente corresponde.

En ese tenor, al estar acreditada la violación a los derechos fundamentales de María Juana Petrona, es justo recomendar al Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, lo siguiente: a) gire sus instrucciones a los servidores públicos del Ayuntamiento que preside, a fin de que sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para instalar cajas de agua, afectación de árboles y disposición de material de construcción, sin el consentimiento de los propietarios o procedimiento expropiatorio, evitando de esta forma, la realización de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos; b) tome las medidas adecuadas, justas y legales para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, antes de la instalación de la caja de agua, para que dicho predio quede con las características que originalmente tenía y que fueron cambiadas por los trabajos realizados en el predio de María Juana Petrona, corriendo a cargo del Ayuntamiento todos los gastos que se generen para esos efectos; c) gire instrucciones precisas a quien corresponda, a fin de que se pague a la quejosa, la cantidad que resulte por los daños y perjuicios que le fueron causados con la realización de la caja de agua en el predio de su propiedad y sin su permiso, restituyéndole la superficie afectada por la instalación de la caja de agua que indebidamente fue construida en dicho predio; d) gire sus instrucciones al Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Gaspar Reyes García, Subdirector de Obras Públicas de ese Municipio en el momento en que ocurrieron los hechos y en contra de los servidores públicos que pudieran haber participado en la afectación del predio de la quejosa y que resulte competente para sancionar, realizándose las diligencias sean necesarias para esclarecer los hechos que derivan del presente documento, y en su momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

Por otra parte, en virtud de que los actos materia de la queja, pueden constituir faltas sancionables de acuerdo con la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita colaboración al H. Congreso del Estado, para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, que desempeñaban tal cargo en el momento en que ocurrieron los hechos, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron, por los actos a que se refiere este documento y en su caso sancionarlo como corresponda.

Asimismo, en atención a que a con motivo de los hechos se inicio la averiguación previa 661/2007, en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, resulta procedente solicitar atenta colaboración al Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se continúe con la integración de la indagatoria mencionada, por los hechos que se desprenden del presente documento, se realicen las investigaciones respectivas y en su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal de Ahuacatlán, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Gire sus instrucciones a los servidores públicos del Ayuntamiento que preside, a fin de que sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de ordenar la afectación de inmuebles para instalar cajas de agua, afectación de árboles y disposición de material de construcción, sin el consentimiento de los propietarios o procedimiento expropiatorio, evitando de esta forma, la realización de actos ilegales y arbitrarios en contra de los ciudadanos.

SEGUNDA. Tome las medidas adecuadas, justas y legales para restablecer las cosas al estado en que se encontraban, antes de la instalación de la caja de agua, para que dicho predio quede con las características que originalmente tenía y que fueron cambiadas por los trabajos realizados en el predio de María Juana

Petrona, corriendo a cargo del Ayuntamiento todos los gastos que se generen para esos efectos.

TERCERA. Gire instrucciones precisas a quien corresponda, a fin de que se pague a la quejosa, la cantidad que resulte por los daños y perjuicios que le fueron causados con la realización de la caja de agua en el predio de su propiedad y sin su permiso, restituyéndole la superficie afectada por la instalación de la caja de agua que indebidamente fue construida en dicho predio.

CUARTA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Gaspar Reyes García, Subdirector de Obras Públicas de ese Municipio en el momento en que ocurrieron los hechos y en contra de los servidores públicos que pudieran haber participado en la afectación del predio de la quejosa y que resulte competente para sancionar, realizándose las diligencias sean necesarias para esclarecer los hechos que derivan del presente documento, y en su momento se determine lo que conforme a derecho proceda.

No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración municipal en Ahuacatlán, Puebla, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad que deriva a los integrantes del Ayuntamiento de ese lugar, fueron en una administración ajena a la hoy existente; no obstante lo anterior, dada la continuidad que debe prevalecer en la misma, corresponde dar cumplimiento al presente documento al actual Presidente Municipal, lo que permitirá que las conductas impropias que se determinaron no sean repetitivas, asimismo se provea lo necesario para restituir en sus garantías a la quejosa por los daños causados y referidos en el presente documento

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma.

La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de darle cumplimiento.

Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo.

C O L A B O R A C I Ó N

Al C. Procurador General de Justicia del Estado.

ÚNICA. Tomando en consideración que con motivo de los hechos se inicio la averiguación previa 661/2007/ZAC, en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, resulta procedente solicitar su atenta colaboración a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se continúe con la integración de la indagatoria mencionada, por los hechos que se desprenden del presente documento, se realicen las investigaciones respectivas y en su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda.

Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA. En virtud de que los actos materia de la queja, pueden constituir faltas sancionables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicita colaboración al H. Congreso del Estado, para que inicie procedimiento administrativo de investigación en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, que desempeñaban tal cargo en el momento en que ocurrieron los hechos, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron, por los actos a que se refiere este documento y en su caso sancionarlos como corresponda.

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, marzo 31 de 2008.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.